



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO: 11001-33-35-026-2018-00044-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO – MEDIDA CAUTELAR
DEMANDANTE: CLARA INES GAITAN AGUILAR
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

A través de memorial obrante a folios 865 a 898, la apoderada judicial de la parte actora interpuso y sustentó recurso de reposición contra el auto proferido por este Despacho, en virtud del cual se negó la medida cautelar solicitada en el escrito introductorio.

Conforme a lo anterior, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto, con el objeto de determinar su concesión, de acuerdo con las siguientes,

CONSIDERACIONES

i. Del recurso de reposición

En primer lugar, frente al recurso de reposición, se observa que el art. 242¹ del C.P.A.C.A., establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. *Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.*

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

Visto lo anterior, es claro que el recurso de reposición solo procede contra las decisiones que no son susceptibles del recurso de apelación, tal como ocurre en el presente asunto.

¹ En vista de que el recurso fue incoado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 del 2021, a efectos de resolver el recurso, se dispondrá a la aplicación de las normas contenidas en la Ley 1437 del 2011, sin las modificaciones realizadas por la Ley 2080 del 2021.

Así pues, y conforme a lo definido en el inciso segundo del artículo 242 del C.P.A.C.A., es preciso manifestar que en tratándose del recurso de reposición, su trámite se rige por los arts. 318 y 319 del C.G.P., en donde se plasma lo siguiente:

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.(...)”

“ARTÍCULO 319. TRÁMITE. El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo [110](#).”

Subraya fuera de texto

En este orden de ideas, como el recurso de reposición fue interpuesto dentro del término legal, es decir, dentro de los 3 días siguientes, el Despacho encuentra que el mismo es procedente y por consiguiente, es viable resolverlo.

Pues bien, recuerda el Despacho, que en el presente asunto, **CLARA INES GAITAN AGUILAR**, instauró demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra **NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, con el objeto de obtener **i)** la nulidad parcial de la Resolución No. 2431 del 12 de julio de 2017, por medio del cual se le nombró en periodo de prueba en un cargo de carrera administrativa en la ciudad de Medellín; la nulidad de la Resolución No. 1-0448 del 29 de agosto de 2017, por medio del cual se dispuso reubicar el empleo denominado “*profesional especializado II*”, de la Dirección Seccional de Antioquia a la Dirección Seccional de Bogotá; **ii)** la nulidad de la Resolución No. 10518 del 19 de septiembre de 2017, mediante el cual se reubicó el cargo denominado “*profesional especializado II*”, de la Dirección Seccional de Bogotá a la Dirección Seccional de Antioquia; y así mismo, **iii)** la nulidad de la Resolución 10435 del 24 de agosto de 2017, por medio del cual fue reubicado un cargo de carrera administrativa denominado “*profesional especializado II*”, de la Dirección Seccional de Bogotá a la Dirección Seccional de Cali.

Las anteriores declaratorias de nulidad de actos administrativos, son solicitadas con el objeto de obtener, a título de restablecimiento del derecho, el nombramiento en propiedad en el cargo de profesional especializado II, dentro de las vacantes ofertadas en la convocatoria No. 002-2008 grupo 3, en la ciudad de Bogotá.

Ahora bien, la parte actora solicita como medida cautelar, las siguientes: (i) se restablezca su derecho, y se posesione mediante la figura de encargo en el cargo que ostentaba antes de la expedición de la resolución No. 10518 del 19 de septiembre del 2017, es decir, *profesional especializado II en la ciudad de Bogotá* hasta las resultas del proceso, y sin perder sus derechos de carrera administrativa; (ii) sea nombrada y/o posesionada, mediante la figura de encargo, en los cargos revocados o en los vacantes ofertados dentro de la convocatoria No. 002-2008 grupo 3, en la ciudad de Bogotá; y (iii) sean suspendidos los efectos de la totalidad de actos administrativos demandados, puesto que, a su consideración, estos fueron expedidos en contravía de las normas regulatorias del concurso de méritos, con falsa motivación y con fines de daños a los interesados.

Encontrándose para resolver la medida cautelar elevada por la actora, este Despacho, en vista de que no se logró acreditar el acaecimiento de un daño o perjuicio irremediable por el acto administrativo objeto de demanda, por cuanto no se expuso con claridad ni se demostró afectación alguna a derechos fundamentales, o la existencia de motivos por los que se llegase a considerar que, de no otorgarse tal medida los efectos de la sentencia serían nugatorios, mediante auto del 21 de julio de 2020, procedió a **negar la medida cautelar**.

La parte actora, a través de memorial, interpuso recurso de reposición sustentándolo de la siguiente manera:

“1. Dentro de las consideraciones del despacho para Denegar la Medida cautelar, se observa que no tuvo en cuenta el acervo probatorio aportado en cada una de las actuaciones administrativas y judiciales en que se vio inmersa mi poderdante para salvaguardar sus derechos que hoy siguen vulnerados, pero además que desconoce igualmente los actos administrativos que se surtieron por parte de la FGN vulnerado derechos de carrera administrativa y los propios reglamentos de la Convocatoria 2008, pero además que le dan estos derechos al servidor que se encontraba en CALI señor Cornelio Zuñiga y que luego reubican la plaza en su lugar de residencia que no era otro que Cali argumentando que no podía trasladarse a Bogotá por su grupo familiar, pero cuando mi poderdante lo hace dentro de la acción constitucional porque NO querían hacer su nombramiento, desconocen sus derechos de carrera y la nombran en Medellín, cuando la plaza estaba en Bogotá y de allí las diferentes acciones de tutela porque al No querer dar las plaza o para no hacer los nombramientos argumentando planta Global y Flexible daban los cargos en otras ciudades, como en este caso, los señores Jueces constitucionales señalan dentro del fallo de tutela que serían los jueces administrativos los que debían pronunciarse respecto a las condiciones FAMILIARES y análisis de la plaza en Bogotá, de allí del nuevo acto administrativo reubicando el cargo nuevamente en Medellín .

2. sumado a este panorama, se desconoce el sinnúmero de tutelas que hoy siguen respecto a la CONVOCATORIA 2008, por la forma en que manejaron las plazas y el argumento de planta global y flexible que siguen pregonando como en este caso concreto y que no se tuvo en cuenta en sus fallos de tutela para el caso concreto respecto a la PLAZA o lugar geográfico donde se encontraba el cargo convocado y no otro Y EL DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR, dado que fueron los mismos jueces constitucionales como en el caso de mi prohijada quienes manifestaron que no eran los competentes y que serían los jueces de lo contencioso administrativo

quienes debían pronunciarse sobre esta vulneración y hoy se observa que TAMPOCO fue objeto de pronunciamiento, porque es aquí donde una vez más vulneran los derechos fundamentales de mi prohijada para acceder al cargo de profesional especializada II que se ganó en concurso de méritos con plaza en Bogotá, pero que no se tuvo en cuenta y es una razón más para señalar porque de este medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y porque la necesidad de decretar una medida cautelar a mi prohijada.

3. Pero además, se acepta la teoría de la FGN a través de su apoderada, cuando refieren que mi poderdante está en Encargo de Fiscal Local, cuando ese no es tema de esta acción constitucional, dado que se ganó a través de otro proceso de varios años ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que para fortuna de mi poderdante pudo acceder luego que tampoco querían hacer su nombramiento pese a ser del Consejo de Estado y posterior a que fuera reubicado el CARGO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO II en Medellín, luego que había ACEPTADO EL CARGO EN BOGOTA Y ESTANDO VIGENTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA NO LE CONCEDIERON LA COMISION PARA REALZIAR PERIODO DE PRUEBA AL SER SERVIDORA DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y TOMAR POSESION EN BOGOTA PESE A QUE CONOCIAN DEL ACUERDO 001 DE 2006 QUE REGLAMENTO EL CONCURSO Y QUE NO OPERABA EL PERIODO DE PRUEBA, SINO QUE SOLAMENTE SE DEBIA HACERSE LA ACTUALIZACION EN EL RUC, SIN EMBARGO HICIERON CASO OMISO.

Esto significa su señoría, que NO se puede tomar como referente este Encargo de FISCAL LOCAL ganado por mi prohijada a través de sentencia judicial en otro proceso para argumentar que no procede la medida provisional, toda vez, que existe un DETRIMENTO PATRIMONIAL de mi poderdante, porque como es sabido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que parte de la Asignación mensual de estos funcionarios que se conoce como BONIFICACION JUDICIAL NO ES FACTOR SALARIAL y el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO II es en Propiedad y su asignación mensual si constituye factor salarial y está por encima del salario del Fiscal, quiere decir que tampoco es un argumento que soporte esta decisión, por el contrario cercena la posibilidad de acceder a un cargo superior mediante el concurso de méritos que se ganó en franca lid por mi prohijada, ocupo el puesto (8) y aunque muestran los actos administrativos para señalar la transparencia de la entidad, solo basta con revisar minuciosamente cada una de las acciones constitucionales y peticiones para que se hiciera su nombramiento en el Cargo y al ver que No podía trasladarse a otra Ciudad no solo porque No tenía arraigo en esa ciudad sino que tenía a cargo su padre de 87 años con dx de cáncer activos y otras enfermedades que era conocimiento de la entidad.

Sin embargo, deciden de manera unilateral nombrar al otro servidor con menor puntaje como era el señor CORNELIO que estaba en Cali y ocupo el puesto (39), en la plaza en Bogotá, pero a diferencia de mi prohijada No inicio ninguna acción constitucional, por lo que solicito se hiciera la reubicaron el cargo de Bogotá a CALI donde se encontraba como profesional vulnerado una vez más las normas del concurso respecto a la plaza y según lista de elegibles. Cosa diferente su señoría es que se decrete la Medida cautelar para que se conceda el ENCARGO EN EL CARGO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO II a mi prohijada y ella tome la decisión de NO aceptarlo dado que por sentencia Judicial del Consejo de Estado tiene el Cargo de Fiscal Local hasta que llegue el titular del concurso, PERO ESTA DECISION ES INDEPENDIENTE DEL DERECHO QUE TIENE MI PROHIJADA A QUE SE CONCEDA LA MEDIDA CAUTELAR DEL ENCARGO EN EL CARGO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO MIENTRAS SE TENGA FALLO DEL JUEZ

COMPETENTE DENTRO ESTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO”

Pues bien, como primera medida, se debe tener en cuenta que la suspensión provisional pretendida, es considerada como una medida cautelar, pues así lo dispuso el art. 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al señalar lo siguiente:

“ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuera posible

(...)

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

(...)”

Ahora bien, el art. 231 del C.P.A.C.A., establece los requisitos para decretar las medidas cautelares, así:

“ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá **por violación de las disposiciones invocadas en la demanda** o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.”

De la norma, se infiere que dentro de los requisitos para decretar una medida cautelar, específicamente la suspensión provisional de sus efectos, se plantea una disyuntiva en cuanto al mecanismo para decretar su procedencia, pues como lo señala el artículo en comento, la solicitud procederá bien sea por (i) violación de las disposiciones que se invoquen en la demanda, (ii) cuando tal violación surja

del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o (iii) cuando la violación surja del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En ese orden, el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, faculta al Juez Administrativo para que desde el primer momento procesal obtenga la percepción de que hay la violación normativa alegada, y en ese orden, pueda comparar el acto administrativo acusado con las normas invocadas que se consideran violadas, y le permite además estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Ahora bien, descendiendo al caso en concreto, reitera el Despacho que, mediante resolución No. 02431 del 2017, *“por medio de la cual se efectúan unos nombramientos en periodo de prueba en la planta global de la Fiscalía General de la Nación y se declaran insubsistentes unos nombramientos”*, frente a la demandante, en su artículo 2º se dispuso (fl.237): *“NOMBRAR, en periodo de prueba, por un término de tres (3) meses, en la planta global de la Fiscalía General de la Nación, a los elegibles que se relacionan a continuación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. (...)”*

Convocatoria Grupo	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	UBICACIÓN	NOMBRE SERVIDOR AL QUE SE LE DECLARA INSUBSISTENTE	CEDULA
CONVOCATORIA 02 GRIPO 03	CLARA UNES GAITAN AGUILAR	39646749	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	DIRECCION SECCIONAL- ANTOQUIA	CAROLINA BLAANDON BERMUDEZ	32105935

(...)”

Así pues, con lo dispuesto anteriormente, hasta esta etapa procesal, no encuentra el Despacho motivos que indiquen que, contrario a lo manifestado por la parte actora, se haya efectuado un indebido nombramiento en el cargo de carrera administrativa denominado *“Profesional Especializado II; convocatoria 2, Grupo 3” en el marco del concurso de área administrativa y Financiera de 2008*, puesto que, sin realizar prejuizgamiento, y de conformidad con las documentales aportadas al libelo por las partes, **(i) frente a tales cargos ofertados, no se previó la escogencia de una ciudad de preferencia para ser nombrado por parte de los concursantes, sino que tales cargos, fueron ofertados de manera general, en las que se evaluarían las necesidades del servicio de cada seccional, y en segundo lugar, (ii) se ordenó nombrar y/o vincular a la demandante en el cargo al cual aspiró y quedó en lista de elegibles.**

Si bien la controversia planteada en sí, no es sobre el nombramiento, toda vez que está demostrado que se efectuó, **sino sobre el lugar/dirección/seccional en que se realizó**, puesto que, frente a otros concursantes y/o terceros, con menor puntaje en la lista de elegibles sí se realizó nombramiento en su respectivo lugar de residencia, y frente a la demandante, que obtuvo un mayor puntaje que los concursantes y/o terceros relacionados, no se realizó el nombramiento acorde con su lugar de residencia, debe manifestar el Despacho que, esta no es la etapa

procesal para determinar si frente al caso particular de la demandante hubo irregularidades, de cualquier índole, en la escogencia del lugar/ dirección/ seccional de nombramiento, máxime cuando, de las documentales obrante al plenario no se evidenció prima facie dicha irregularidad.

Valga aclarar que, si bien en el desarrollo del proceso, con la práctica de la totalidad de pruebas pueda llegarse a demostrar la totalidad de eventos y escenarios violaciones a las normas regulatorias de la convocatoria, nombramientos con falsa motivación y con fines de daños a los interesados como lo enuncia la parte demandante, hasta el momento, con las pruebas obrantes, solo se evidencia que: 1) se efectuó nombramiento acorde a las condiciones de la convocatoria; y que 2) a determinados concursantes se realizó nombramiento en la dirección/seccional de la fiscalía concordante con su lugar de residencia. **No obstante, del nombramiento de demás concursantes en la dirección /seccional de la fiscalía de su lugar de residencia, no se puede presumir automáticamente, así tampoco implica, un trato irregular, discriminatorio, o violatorio de los derechos del resto de concursantes.**

Frente al argumento de la protección del derecho a la unidad familiar de la demandante, de vasto desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional, considera el Despacho que no se configura la aplicación a los principios de precaución ni prevención, a efectos de acceder a la medida cautelar, pues se reitera, **no existen suficientes elementos de juicio que permitan evidenciar la ocurrencia de un daño ocasionado por el nombramiento realizado a la demandante, al cargo de Profesional Especializado II en la dirección/seccional Medellín.** Máxime cuando, se reitera que no se desconocieron los resultados de la convocatoria, pues se materializó el nombramiento al cargo que optó, y en segundo lugar, cuando a la fecha, si bien por el cúmulo de situaciones de presuntas irregularidades objeto de litis la demandante no ha podido acceder al cargo de carrera administrativa denominado “*Profesional Especializado II; convocatoria 2, Grupo 3*” en el marco del concurso de área administrativa y Financiera de 2008, a la fecha la señora Clara Inés Gaitán Aguilar, ostenta en la modalidad de encargo, el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIAPLES Y PROMISCUOS, con sede **en la ciudad de Bogotá.**

Este último punto, que también es objeto de inconformidad por parte de la demandante, **es importante traerlo a colación para el estudio del pedimento de la medida cautelar**, puesto que, **i)** si bien la controversia de la presente demanda no gira en torno al cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS que actualmente ostenta la demandante, **ii)** así como tampoco gira en torno a las múltiples acciones constitucionales que originaron dicho nombramiento, la demandante al encontrarse en posesión de dicho cargo, con una remuneración similar al del *profesional especializado I*, y al ser acreedora de la totalidad de prestaciones laborales, sociales y de seguridad social propias de las relaciones legales y reglamentarias, no se encuentra ante un escenario de potencial daño, riesgo inminente o perjuicio irremediable que requieran a la fecha, la intervención del juez de lo contencioso administrativo a través de una medida cautelar.

Reitera el Despacho, que el encargo como FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS, **es traído a colación y determinante, única y exclusivamente a efectos de determinar la intervención administrativa cautelar.** Sin que al momento se haya demostrado la causación de un perjuicio irremediable, o un escenario en el que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Razón por la cual, este Despacho, prima facie, no evidencia una violación de las disposiciones invocadas en la solicitud de medida cautelar.

Reitera el Despacho que si bien bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1437 de 2011, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, le corresponde al Juez realizar un análisis de las normas que se invocan como violadas, del material probatorio, en confrontación con el acto administrativo acusado, **dicho análisis se encuentra supeditado a no incurrir en prejuzgamiento de conformidad con lo expuesto en el artículo 229 de la misma norma.**

Aunado a lo anterior, ha de indicarse que cada solicitud de medida cautelar debe analizarse individualmente, teniendo en cuenta para ello los requisitos que debe atender la parte actora en relación con su sustentación, de lo contrario implicaría que el Despacho realice un análisis tan exhaustivo de la normatividad que rige la materia, que lo llevaría en esta etapa inicial del proceso a sacar conclusiones determinantes con las que prácticamente perfilaría su decisión final.

Al respecto, el Consejo de Estado, señaló:

“Ahora bien, no obstante que la nueva regulación como ya se dijo permite que el juez previo a pronunciarse sobre la suspensión provisional lleve a cabo análisis de la sustentación de la medida y estudie pruebas, ocurre que ante el perentorio señalamiento del 2° inciso del artículo 229 del CPACA (Capítulo XI Medidas Cautelares- procedencia), conforme al cual: “La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”, es preciso entonces que el juez sea muy cauteloso y guarde moderación a fin que el decreto de esta medida cautelar no signifique tomar partido definitivo en el juzgamiento del acto ni prive a la autoridad pública que lo produjo o al demandado (...), de que ejerzan su derecho de defensa y que para la decisión final se consideren sus argumentos y valoren sus medios de prueba”.²

De conformidad con lo argumentos esgrimidos, en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción de las partes, y toda vez que no se logró acreditar el acaecimiento de un daño o perjuicio irremediable por el acto administrativo objeto de demanda, por cuanto no se demostró una grave afectación a derechos fundamentales o la existencia de motivos por los que se llegasen a considerar que de no otorgarse la medida solicitada los efectos de la sentencia serían nugatorios, este Despacho, se mantiene incólume en su decisión de **NEGAR LA MEDIDA**

² CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Auto del once (11) de julio de dos mil trece (2013), N° de Radicación: 110010328000201300021-00

CAUTELAR, y en consecuencia, en NO REPONER el auto del 21 de julio de 2020, a través del cual se NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR.

En mérito de lo expuesto el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad De Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO.- NO REPONER el auto a través del cual se negó la medida cautelar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Por Secretaría, ingrésese nuevamente al Despacho, para seguir con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CA



Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**f9834a46d5381c1df7d94266487e21539d5b3c0e350ad4902784daae33
9e66ce**

Documento generado en 27/04/2021 12:53:40 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**